



RESERVA DE DOURADOS, BRASIL. FOTO: NILCIMAR CABRERA MORALES

Ojerasca

Suplemento mensual. Número 132. Abril de 2008

Academia y contrainsurgencia: una lectura del libro *La comunidad armada rebelde y el EZLN*

Eculturismo: el "indigenismo" a la moda

El empobrecimiento inexplicable de los más pobres de Guerrero

Flor Crisóstomo, la zapoteca que desafía al Imperio

Revuelta de los ganaderos bolivianos

Los nuevos Santa Anna vs. los mexicanos verdaderos

Asesinan en Oaxaca a dos trabajadoras de la radio triqui

Especial: jóvenes fotógrafos indígenas de Brasil

Los nuevos Santa Anna vs. los mexicanos verdaderos

Que de uno u otro modo la soberanía de México domine en los noticieros, las primeras planas y sobre todo en la conciencia colectiva es mala señal, pero también es buena. La mala noticia es que la soberanía se encuentra en serio peligro, que el país cayó en manos del cojo Antonio López de Santa Anna, el inolvidable “Quinceañeros” en su reencarnación panista (con muchos genes del PRI). Su fórmula es simple, y si suena caricaturesca, lo es: la riqueza de nuestro territorio que no se explote hasta exprimirla, se traspasa a quien la pague en mejor divisa.

La buena noticia es que todavía existe el pueblo mexicano. Invisibilizado, ridiculizado, criminalizado, satanizado por las Aduanas de la Verdad en la propaganda oficial y la información electrónica masiva, conserva el hábito incurable de vivir aquí, en su tierra. De quererla, cuidarla, continuarla.

Y vaya que el poder hace esfuerzos para que los mexicanos se marchen. El mensaje oficial, explícito a partir del foxismo pero activo desde la firma del Tratado de Libre Comercio, es: emigren, vuélvanse tenderos (meseros, recamareros, maquileiros), no siembren ya maíz (como propuso el presidente Felipe Calderón en Zinacantán a principios de mes), nosotros se lo traemos (no dijo de dónde). El sistema los expulsa, a Estados Unidos de preferencia, y les aplaude cuando se van.

Será que México es un mosaico y hay gente para todo, el hecho es que millones de mexicanos, la vasta mayoría, prefiere cantar la *CanCIÓN Mixteca* en vez de vivir-la. Y acá siguen.

Para los modernos Santa Anna, los mexicanos son el único verdadero problema. No lo son las leyes ni el recurso de la violencia institucional, que puede adquirir la forma de un ejército de ocupación en casi todo el territorio nacional, una inundación de policías a domicilio, una horda de motoconformadoras y perforadoras, o todo junto. Tampoco son problema los amarres internacionales, claramente definidos en la edad post-diplomática del Estado mexicano.

Nuestros Santa Anna superan al modelo decimonónico, ya ni siquiera hacen como que pelean para negociar con Bush o espejarse con el paramilitar Uribe. Se refocilan en el verde olivo y el brillo de las

armas para “meter goles” a sus oponentes. No suelen admitirlo, pero a ellos les meten más aún. Combaten dos cosas harto distintas: por un lado al crimen organizado, y por el otro al pueblo en todas sus manifestaciones de inconformidad vital.

El crimen organizado es gemelo del poder político, que lo “combate” jugando ping pong. Entre sí se entienden en el lenguaje universal de la corrupción y el negocio sin escrúpulos. En el actual desorden nacional, los gobernadores andan sueltos. Cuántos de ellos han sido descubiertos como rateros, pederastas, represores, asesinos, manipuladores de la justicia, y como sea representan a las instituciones en Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero, Estado de México. La educación, otro ejemplo, depende de una Condesa Drácula con presencia en tres o cuatro partidos políticos de esos que hay, dueña de un sindicato inmenso y una influencia desorbitada.

El pueblo, en cambio, ¿qué hacer con él? Rejago, querendón, solidario, y con un “ya basta” que le rebota en el pecho desde hace años. A los Santa Anna les gustan los eufemismos, y para sus verdaderas guerras usa otros nombres. Ocurre en Chiapas.

Y también, escandalosamente, en Guerrero, donde la militarización de estos días, con el pretexto de combatir el narcotráfico no ha disuelto ni un solo grupo criminal ni afectado realmente sus intereses, pero bien que intenta desaparecer las estructuras auténticas, como la Policía Comunitaria (CRAC) de la Montaña, a cuyos comandantes y consejeros quiere encarcelar. Persigue a los pueblos mepha’, nahua, mixteco, amuzgo. Sus dirigentes son asesinados. Las comunidades constantemente ocupadas y cateadas por tropas y policías.

El pueblo mexicano, tan ancho y variado, ejemplar en cualquier parte cuando defender lo nuestro se trata, tiene entre sus privilegios el contar con los pueblos indígenas, los últimos y más pequeños, los que más padecen y menos se rinden en ambos lados de la frontera. Son guardianes de la tierra, las aguas, las semillas, las culturas auténticas y la dignidad.

umbrell

Asesinan en Oaxaca a dos jóvenes trabajadoras de la radio triqui

Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20, locutoras de la radioemisora comunitaria del ayuntamiento popular de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas a balazos el 7 de abril cerca de la comunidad Llano Juárez, en una emboscada donde hubo otras peronas heridas. La Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano, integrada por 16 radios comunitarias indígenas en Oaxaca y el sur de Veracruz, exigió a las autoridades federales y estatales el esclarecimiento inmediato del asesinato de las compañeras comunicadoras y locutoras de la radio triqui 94.9 FM: *La voz que rompe el silencio*.

“Conocer y acceder a la información es un derecho de todos y todas las mexicanas. Nuestras compañeras Felicitas y Teresa ejercían ese derecho en beneficio de sus pueblos y por ello fueron asesinadas. Su muerte es una muestra más de la violencia extrema en contra de las mujeres en nuestro país y que sus derechos pueden ser pisoteados sin ningún castigo”, declaró la Red de radiodifusoras, que demanda al Estado una “investigación seria, exhaustiva e imparcial” sobre el crimen, y el castigo a los culpables. También exigió “medidas concretas para garantizar la seguridad de los colaboradores de la radio triqui, quienes después del atentado dejaron de transmitir”.

Jóvenes fotógrafos guaraníes y aruak

Las imágenes que aparecen en Ojarasca este mes forman parte del ensayo fotográfico “Nuestras miradas”, realizado por jóvenes que viven en la Reserva de Dourados, en Matto Grosso do Sul, Brasil, ubicada entre las ciudades de Dourados e Itaporá, cerca de la frontera con Paraguay. Sus 15 mil habitantes son guaraníes (ñandeva y kaiowa) y aruak (torona).

Al presentar la serie, María de Lourdes Beldi de Alcántara apunta que en el área “la falta de trabajo se suma a las pésimas condiciones de vida, lo que impulsa a los jóvenes sin que sean aceptados en las ciudades” (*Nossos olhares*, Universidad de Sao Paulo, Banco Credibel, IWGIA y Ministerio de Cultura, Brasil, 2007). Si corren con suerte, podrán ser aceptados como mano de obra para el corte de caña. Fuera de eso, “son considerados como vagabundos, sucios y malvados”.

Beldi de Alcántara recuerda que llegó a la Reserva de Dourados en 1999 con una Polaroid, “para dejar los retratos a las personas que fotografiaba”. Observó que los jóvenes, a partir de las imágenes, “realizaban largas reflexiones sobre sí mismos y la Reserva”. Las fotos se convirtieron en un “gran instrumento de descripción e interpretación”. En 2006 se estableció allí una oficina fotográfica para algunos jóvenes con historias de violencia extrema y tentativas de suicidio. Este es el resultado.

Hace más de dos años que funciona en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata (Tateikie) un proyecto de “eculturismo” impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI). Desde entonces, la comunidad recibe a turistas de Vallarta, Guadalajara y diversos lugares del mundo con mucho más comodidades que en cualquier otro momento de su historia, ofreciendo un espectáculo cultural atractivo sólo para los ajenos a las verdaderas tradiciones wixárika —su antigua manera de vivir el costumbre, es decir, todo un año dedicado a la milpa y la celebración de las fiestas en torno a el ciclo agrícola.

El “eculturismo” se enmarca en las estrategias mundiales del desarrollo rural: primero unos cuantos sexenios de políticas económicas destinadas a privatizar la tierra y poner en manos de las grandes empresas agroalimentarias los cultivos tradicionales, luego el territorio originario indígena es decretado “reserva natural”, de manera tal que resulte la única opción para que las comunidades indígenas accedan al mundo “civilizado” mediante el uso “sustentable” de sus recursos, hecho casualmente indispensable para mantener el sistema económico.

Así, la moda son las reservas naturales y el encanto de sus poblaciones, mayormente indígenas, en vitrinas: pequeños espacios entre las grandes urbes donde las personas simplemente escenifiquen episodios folklóricos de su cultura y vivan de las miserias que los espectadores les abonen por la puesta en escena.

San Andrés Cohamiata comienza a ser escenario de estas obras teatrales: los principales actores tienen bien memorizados sus diálogos (guiones pensados en instituciones gubernamentales y privadas). El escenario visible o *frontstage* fue promovido por la CDI con una inversión inicial de un millón de pesos y posteriormente 813 mil pesos para equipamiento. La escenografía consta de centro ceremonial, 16 cabañas, dos cocinas, una sala de exposiciones, cinco tejabanés, un temascal y varias letrinas. Este centro “eculturístico” queda ubicado al poniente de San Andrés, y allí los turistas pueden descansar y pasar varios días admirando las riquezas ecológicas y culturales del mundo wixárika —por eso el término “eculturismo”: ecología, cultura y turismo en una misma experiencia.

El espectáculo comienza por la mañana. En el primer acto, un guía de turista y dos músicos tradicionales recorren en

Eculturismo: “indigenismo” a la moda

Lizette Santana Belmont

compañía de un grupo de turistas espectadores el antiguo sitio sagrado Tateikie.

Más tarde, en el segundo acto, el grupo se desplaza al “calihuey alterno” (el centro ceremonial turístico, pero no el centro ceremonial, por eso alterno) donde se narra la cosmovisión y mitología wixárika en presencia de una fogata.

también se están montando las obras teatrales de los huicholes.

El grupo Tatewarí, proveniente de Santa Bárbara, California, lleva cinco años asistiendo a la escenificación eculturística de las fiestas sagradas y la peregrinación a Virikuta, y han concluido el curso preparatorio para el papel de



FOTO: GRACIELA PEREIRA DE SOUZA

Ocurre lo que denominaron “limpia espiritual” a cargo un maraka’ame (el sabio, el chamán, el curandero, el cantador, el sanador que cuida el mundo en la tradición wixárika) con su muvieri (la “flecha emplumada del hablar”), quien junto con el narrador ofrecen al finalizar este supuesto ritual, una jicara tradicional para recibir las propinas de los observadores —ahora partícipes— de este acto, que culmina cuando los turistas salen de la ceremonia y miran la sorprendente gama de colores de las artesanías típicas, hacen el recorrido comprando, se alojan en las cabañas o regresan a Vallarta.

El “eculturismo” fue planteado en la Sierra como proyecto comunitario y aunque goza del auspicio de la CDI es “independiente”. Casualmente la empresa turística Vallarta Adventures obtuvo ciertos beneficios e incrementos en sus viajes, y espera consolidar convenios entre la CDI y la empresa de taxis turísticos Maracame-Huichol (avione-tas que van de Ixtlán del Río, Nayarit a las comunidades huicholas). En California, Puerto Vallarta y Monterrey,

maraka’ame cantador. Ya se prepara un nuevo grupo de actores que arribará al territorio wixárika en septiembre.

En Monterrey un grupo de danzantes mestizos hace la puesta en escena en el Parque Natural La Huasteca, y del mismo modo asisten en compañía de la asociación civil Enlazando Tradiciones a la fiesta tradicional de Semana Santa en Tateikie, presuntamente convertida en la exposición más grande de la tradición huichol —y es “en vivo”.

Y finalmente, una obra maestra promovida por la CDI: el Festival Wixárika en Vallarta, donde unos 30 artesanos, autoridades y algunos maraka’ate de San Andrés Cohamiata hacen representaciones teatrales de las fiestas sagradas del Tambor (Tatei Neixa), del Cambio de Autoridades (Patsixa) y del Peyote (Hikuri Neixa).

Entre aparadores con maniqués vestidos a la última moda, los wixaritari venden su artesanía y su cultura durante 15 días en la Plaza del Caracol, con el patrocinio del gobierno de Jalisco, los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Mezquitiac, el Instituto de la Artesanía

Jalisciense, Sector-Jalisco, la Procuraduría de Asuntos Indígenas del Estado, la U de G, UP y el Fidetur de Puerto Vallarta entre otras organizaciones, empresas y hoteles. Es el gancho perfecto para promover el “eculturismo” en las comunidades wixaritari ya que además de las presentaciones, diariamente se proyecta el video promocional de la CDI y volantes promocionales.

El “eculturismo” de la CDI no es únicamente los nuevos hoteles en medio de la sierra sino la explotación de lo cultural y ecológico (artesanía, escenificación teatral de fiestas y rituales), más vuelos o traslados por tierra (que implica construir carreteras e impulsar agencias de transporte), y la “necesaria” infraestructura turística y de telecomunicaciones. Un negocio redondo para quienes gestionan recursos vía proyectos comunitarios en zonas indígenas y para las agencias de turismo encargadas de administrar los viajes propios de esta panacea de desarrollo rural sustentable promovido por el discurso institucional para turistas “ecológicamente responsables y conscientes de la riqueza cultural”.

Mientras, se sigue reproduciendo un esquema vertical y torcido de “atención a la miseria” que esconde tras bambalinas (o *backstage*) a los verdaderos actores de la tradición wixárika: los comuneros, empujados en una vida de sembradores, agobiados día a día por satisfacer sus necesidades de agua potable, educación, infraestructura y comunicaciones, quienes entienden esta situación como una furtiva ofensiva gubernamental con el fin de mantener un control político-económico-social del territorio y la riqueza natural.

Con todo y su discurso desarrollista posmoderno, el “eculturismo” no ha logrado confundir a los comuneros wixaritari porque ellos saben que esos proyectos nunca funcionan, los mantienen endeudados y pretenden atarlos a una modernidad ajena a su tradición.

En la Sierra Huichola, los caciques han invadido tierras por muchos años y el gobierno lo único que ha hecho es indemnizar a los invasores, decretar unidades de manejo ambiental y proyectos de servicios ambientales, en la misma lógica de control territorial.

El “eculturismo” busca ocultar esto y proyecta al público una escena pintoresca de la realidad indígena, promocionando un descanso y una tranquilidad de los paisajes serranos que los wixaritari no conocen, mientras se profundiza la invasión invisible de los antiguos territorios.

La Jornada
Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca en La Jornada
Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez y Eugenio

Bermejillo • Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán • Caligrafía: Carolina de la Peña • Retoque fotográfico: Alejandro Pavón

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. San-

ta Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, CP. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título:

6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

Academia y contrainsurgencia en Chiapas

Rosaluz Pérez

La investigación de Marcos Estrada Saavedra*, académico y funcionario del Colmex, se realizó, según él admite, en “tres comunidades zapatistas” con “importante población ex-zapatista”, y tres no zapatistas “con población zapatista decreciente”. El trabajo de campo fue en los ejidos Tabasco y Carmen Villa Flores. “El primero participó con el EZLN; después de su ruptura con los rebeldes, una minoría guardó lealtad a los neozapatistas y habitó un terreno anexo”. “Por su parte, la comunidad Carmen Villa Flores, conformada por tojolabales evangélicos de diferentes denominaciones, no participó en absoluto con los insurrectos”. Éste es su universo.

Las comunidades donde Estrada y sus asistentes realizaron entrevistas ya existían mucho antes de 1994. La zona de conflicto ni antes ni después del levantamiento ha sido totalmente zapatista. Las comunidades cien por ciento zapatistas son los nuevos centros de población, que se establecieron en las *tierras recuperadas* tras el levantamiento armado. Pero el autor elige hacer su trabajo de campo sobre el zapatismo en comunidades donde no hay población zapatista y en comunidades mayoritariamente no lo son.

En la introducción el autor dice que su libro es “una contribución al conocimiento de la historia social y política de los tojolabales del municipio chiapaneco de Las Margaritas desde 1930 hasta 2005, siete décadas y media en las que este pueblo ha intentado conseguir por los más diferentes medios su liberación” Enfatiza que en particular ha estudiado “las bases de apoyo del EZLN”. Sin embargo el libro fue escrito con otro objetivo, que no menciona.

Para obtenerlo, elabora cuatro categorías para designar los procesos y sus promotores que han determinado cambios en “la vida colectiva tojolabal”: 1) *La comunidad ejidal*, debida a la política agraria de los años 30 y la colonización de la selva que derivó en la creación de ejidos en terrenos nacionales “gracias” a las políticas “ordenadas desde el centro del país”. 2) *La civitas Christi*, el “encuentro decisivo entre las comunidades tojolabales selváticas y los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal entre 1960 y 1974”, y la práctica teológica “liberacionista”. 3) *La comunidad republicana de masas*, o construcción de “uniones ejidales independientes” entre 1975 y 1987; de “espíritu republicano promovido por los ideólogos y activistas de izquierda social”. 4) *La comunidad armada rebelde*, el zapatismo en las cañadas tojolabales 1988-1996 y 1997-2005.

Es la historia lineal que promete contar. En cambio, despliega un tejido de entrevistas que no ayudan a la comprensión de la historia de los pueblos tojolabales, ni del zapatismo. Es la presentación de otro proyecto político detrás de lo que pomposamente nombra “la

comunidad republicana de masas”, la viabilidad de este proyecto y la justificación “teórica” para un plan de desarticulación de la autonomía zapatista.

Para mostrar esta viabilidad como única, argumenta en contra del zapatismo, describiéndolo como el surgimiento oportunista de una guerrilla que crece de manera autoritaria y deshonesto. Califica como un fracaso el levantamiento armado del EZLN (su objetivo planteado desde el principio). Para Estrada Saavedra, en la actualidad no existe más como movimiento político y lo que queda se encuentra en el ámbito regional. Por su naturaleza militar, es un agente nocivo en las comunidades, y debido a su intolerancia, viola constantemente los derechos de los no zapatistas. Finalmente, cree posible una convivencia entre las diferentes organizaciones o agrupaciones, *a excepción de los zapatistas*.

Estrada dice “guerrilla” para hablar del proceso zapatista, y es de esta manera como lo analiza. Deja de lado su trayectoria política de más de una década y su repercusión nacional, global y local. Su término “guerrilla” tiene una connotación despectiva que le ayuda a resaltar el aspecto militar, sin hacer la diferencia con la construcción civil de la autonomía, que atribuye a una estrategia militar local cuando en la realidad esta construcción va en sentido totalmente opuesto.

Estrada omite bastante información histórica, omite las políticas económico-sociales de contrainsurgencia y el cerco militar en el que se encuentran las comunidades. Reduce el enfoque a un proceso local e induce la conclusión de que “la comunidad republicana de masas” es el proyecto legítimo y modernizante de las “uniones ejidales” independientes (como Unión de Ejidos de la Selva, Lucha Campesina, Tierra y Libertad, la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; aunque el libro se enfoca sólo en las tres primeras, todas configurarían esta “comunidad republicana de masas”). Argumenta que estas organizaciones con “treinta años de experiencia de democratización”, se han convertido en “actores colectivos capaces de establecer relaciones con las instituciones en su propio beneficio”.

La propuesta contrainsurgente. El punto central del proyecto político que avala Estrada es la relación con el Estado a través de la institucionalización de las organizaciones campesinas. Recuerda la vieja fórmula del PRI, donde las organizaciones campesinas serían el actor social en relación con el Estado. Quedan fuera la autonomía zapatista y su proyecto político de reconocimiento a los pueblos indígenas, su participación en las decisiones nacionales y de los pueblos originarios.

Es decir, la relación de una organización campesina con el Estado es económico-social, donde no figura una relación político-cultural. No tiene cabida un gobierno autónomo que imparte justicia, decide sus planes de desarrollo y vigila los recursos naturales en

su territorio. En cambio, ofrece “sugerencias” de lo que podría ser “la salida al conflicto en Chiapas” a través de los argumentos que van en dirección similar al llamado Plan Chiapas.

En 2000 circuló un documento en la secretaría de Gobernación, titulado Plan Chiapas, en el que aparecían propuestas para la desarticulación del movimiento zapatista (Carlos Fazio, *La Jornada*, 12 de diciembre de 2000). Estas propuestas iban encaminadas a lo que se propone Estrada: afirmar que las organizaciones campesinas son los interlocutores adecuados para la relación con el Estado; negar el conflicto agrario en Chiapas como uno de los puntos que dieron origen al levantamiento; deslegitimar la recuperación de tierras en 1994, así como la existencia de un territorio zapatista; reducir las reivindicaciones de los pueblos a demandas de carácter económico social, y en ese sentido entiende la autonomía, como si el problema fuera la pobreza, dejando de lado el reconocimiento político-cultural a escala nacional.

Esto implicaría la desarticulación de los municipios autónomos y los Caracoles, la desarticulación del trabajo diocesano de carácter político, y reactivar las órdenes de aprehensión contra la dirigencia zapatista.

Las armas de su crítica. Para el autor, la “comunidad republicana de masas” es el proyecto que debió extenderse en las comunidades de Chiapas y no el zapatismo, que no sólo obstruyó sino que “capitalizó” lo que era mérito de otros y ha implicado un retroceso en el proceso de “liberación de los pueblos”. La red de relaciones, el proceso, los actores y el contexto, entre otros factores, hacen de las comunidades una realidad muy compleja que no se puede analizar a la simple vista de la ausencia o presencia de un actor.

Para demostrar su hipótesis sobre el EZLN, presenta declaraciones de los entrevistados u opiniones suyas. Para el lector lejano a los procesos en Chiapas no resultará claro que la realidad dista mucho de como la presenta el autor. En la presentación de datos existen omisiones, información tendenciosa y contradictoria, no se cotejan ni analizan las declaraciones de sus entrevistas. De esta manera presenta de una forma simplista sus críticas hacia el zapatismo.

Reclama que en sus orígenes el EZLN infiltró las organizaciones de la “comunidad republicana de masas” para hacerse de base social, creó un espejismo y engañó a la gente, que al participar creyó que tras ganar la revolución “vivirían como los ricos de la ciudad”. Que el inicio de la guerra se debe a la presión del EZLN sobre sus bases para que se inclinaran por esta vía. Según Estrada, la pertenencia a las filas del EZLN fue un ejercicio voluntario, posteriormente se convirtió en obligación mediante amenazas.

Todo esto es dudoso. La decisión de dar la vida por un proyecto en el que probablemente no se alcanzarán a ver los frutos, como reiteradamente señalan los zapatistas de manera pública y en su relación cotidiana, refleja que su opción por la vía armada y posteriormente la política no es una decisión ingenua (“impuesta”), como quisiera Estrada.



FOTO: ERNESTO RAULIO GONÇALVES

No aclara el papel que han jugado los líderes entrevistados a lo largo del conflicto respecto a sus propias bases, a pesar de existir información sobre su corrupción

El crecimiento del EZLN se debe, no a una “campaña de convencimiento”, sino haber sabido escuchar, entender y dar forma a las aspiraciones de los pueblos que se vieron reflejados en ese proyecto. Precisamente en los años 70 y 80 las demandas de los pueblos por la vía pacífica se habían agotado (Neil Harvey, *La rebelión de Chiapas*, ERA, México, 2000). De hecho, antes de que se votara la guerra, el EZLN advirtió de sus riesgos y peligros.

En la historia de Chiapas han existido otras rebeliones indígenas. Si el EZLN no hubiera participado en el proceso, posiblemente no se habría evitado una rebelión, un conflicto armado. Imperaban condiciones para la desesperación. En la actualidad no son pocas las ocasiones que el EZLN como organización debe fungir como contenedor y evitar confrontaciones desesperadas ante las provocaciones. Un ejemplo es la no respuesta ante las incursiones militares, sobre todo en 1997-1998, y actualmente las provocaciones efectuadas por los paramilitares de la Opddic.

Para Estrada, el EZLN no cumplió con lo que la revolución prometía: ser una lucha nacional. Respecto a la toma de tierra, acusa al EZLN de no hacer repartición de tierras y quedarse con lo que pertenece a los campesinos bases de apoyo. Otros autores han documentado, al contrario, que la toma de tierras fue una de las acciones más importantes del zapatismo, cuando el Estado había puesto fin al reparto agrario (Gemma Van der Haar, *El movimien-*

to Zapatista de Chiapas: Dimensiones de su Lucha, Labour Again Publications, 2005, y *La campenización de la zona alta tojolabal: el remate zapatista*, 99-113, Transformaciones Rurales en Chiapas, UAM-Xochimilco, 1998). También ignora la existencia de nuevos centros de población. Señala que las comunidades se gobiernan con un sólo mando (Marcos) a través de una estructura que lo facilita a través de una relación clientelar con el CCRI.

Acusa al EZLN de sostenerse a costa de la precariedad de la gente, de matar a sus desertores y sobre todo a los “traidores”. Esto se menciona en dos entrevistas, sin aclarar el origen de la información, más parece opinión, rumor o prejuicio.

Acusa al EZLN de crear un espejismo con sus bases de apoyo de ser los defensores del pueblo y en situación de emergencia salir huyendo, como según él y uno de sus entrevistados “sucedió” en el enfrentamiento en Chavajeval en 1998. Es sobre todo en estos puntos donde el autor insiste en hacer creer que el EZLN funciona como guerrilla, omitiendo que, a pesar de ser un ejército que no ha negado su carácter vertical y militar (EZLN, 2005), desde 1994 mantiene una tregua militar, apostando a una vía política. Paralelamente ha creado las condiciones para que en las comunidades se construyan instancias y formas de organización cíviles, donde las decisiones en la vida de los pueblos son tomadas por sus propios habitantes. Ser zapatista y participar del zapatismo es una elección individual; así como existen pueblos completos que han elegido serlo, hay familias en medio de pueblos con otra elección, o un sólo miembro en una familia con otra opción. Es una entre otras.

En la actualidad, los pueblos o personas en la zona de conflicto que eligen no ser zapatistas se convierten en capital político, recompensado con programas clientelares sin ninguna proyección a largo plazo (Progres, Oportunidades, Vivienda Digna, Procampo).

Más bien habría que preguntarse otra cosa. Si ser zapatista es tener todo en contra, y no serlo es respaldado y premiado por el Estado ¿porqué sigue habiendo zapatistas? De hecho, más que en 1994 aunque la academia y la propaganda gubernamental insistan en lo contrario.

Las afirmaciones de Estrada son osadas. En la autonomía, dice, el EZLN tiene una política social de precariedad que conduce a su población al rezago de tres décadas atrás; las mujeres zapatistas se encuentran en un estado de subordinación; el EZLN es un obstáculo para el desarrollo y la autonomía de las comunidades, y debe su crecimiento al pragmatismo de los campesinos al establecer “relaciones estratégicas”. Los que nombra “filozapatistas” se relacionan de manera acrítica, romántica, con los zapatistas, y en ocasiones con “despotismo”. Acusa al EZLN de no tener el impacto nacional que esperaban sus bases. Y afirma tan tranquilo que los zapatistas amenazan de muerte a aquellos que salen de la organización, que existen “parias” y estigmatizados, y que impiden que los no zapatistas reciban apoyos gubernamentales. Para Estrada, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) sólo sirven para que el EZLN controle las comunidades.

Estrada no se entera de que la autonomía en las comunidades, municipios y caracoles zapatistas es un proceso civil, construido con un trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y tiempo por parte de las y los zapatistas de todas las edades. Que teniendo todo en contra y desde la nada han levantado sistemas de educación, salud, producción y otros, con o sin apoyos solidarios. Estas alternativas construidas por los pueblos han repercutido directamente en la calidad de vida, perspectivas y apropiación de sí. Es claro que sin la existencia del EZLN como marco de protección, sería imposible la construcción y existencia de este proceso de autodeterminación, atacado y negado por el Estado.

La existencia de las JBG ha generado el espacio de interrelación con los zapatistas a nivel local, nacional e internacional. Uno de los logros más significativos que da legitimidad en los hechos a las JBG es ser una instancia para resolver problemas, una alternativa en la que se tratan todo tipo de conflictos a la que principalmente acuden personas no zapatistas que encuentran en esta instancia una posibilidad de arreglar su problema. Por ejemplo, jóvenes priístas que desean divorciarse y se les obligaba a seguir casados, o presidentes municipales indígenas que se han entendido mejor para resolver, junto con las JBG, problemas locales que las oficinas centrales habían archivado. Este acierto se debe a que en las JBG se encuentran elementos propios del pueblo, con los que es más fácil resolver un conflicto.

El método de Estrada. En el gordo libro no se escucha la voz de los actores para entender, reflexionar y aportar en los vacíos. Se presentan como instrumentos para confirmar sus hipótesis y conclusiones predeterminadas aunque, citando a Touraine, sostenga que considera a los actores “sujetos autónomos”.

No aclara las circunstancias ni las formas en que las entrevistas fueron realizadas, ni el papel que han jugado los líderes entrevistados a lo largo del conflicto respecto a sus propias bases, a pesar de existir información sobre su corrupción.

Las conclusiones, deliberadamente localistas y con poco respeto a los diferentes actores, reducen un conflicto de dimensiones históricas a simple problema económico-social.

Rosaluz Pérez ha acompañado durante más de una década los procesos civiles de las comunidades autónomas de Chiapas. Actualmente es estudiante de Diploma en la École de Hautes Études en Sciences Sociales, París.

La zapoteca que desafía al imperio

Gloria Muñoz Ramírez, Chicago, Illinois. Flor Crisóstomo, zapoteca de 29 años de edad, llegó a trabajar a Estados Unidos hace 8 años. Su testimonio es la historia colectiva de más de 12 millones de trabajadores indocumentados en este país, muchos de origen indígena y campesino. El 19 de abril del 2006, agentes de inmigración irrumpieron violentamente en la compañía Ifco System, en la que trabajó Flor reciclando madera durante más de 5 años. Fue la primera redada masiva en este país, y en ella arrestaron simultáneamente a 1 200 trabajadores de 16 sucursales de la misma compañía.

Flor apeló legalmente la deportación sin ningún resultado. El 28 de enero del 2008 el gobierno de Estados Unidos le ordenó salir inmediatamente del país. Ese mismo día ella decidió permanecer en resistencia mediante un acto de desobediencia civil. "Tomé esta decisión para que el gobierno arregle las leyes descompuestas y acabe con el sistema inhumano de mano de obra indocumentada y de explotación".

En una pequeña habitación de una iglesia metodista que accedió a prestarle refugio en calidad de santuario, Flor permanece las 24 horas del día desde hace tres meses, lo que no le impide participar y, desde ahí, organizarse y gritar su indignación. Perteneció a la organización Pueblos sin Fronteras, al igual que Elvira Arellano, quien luego de ser deportada continúa luchando desde México por los derechos de los trabajadores indocumentados.

Flor es prófuga de la justicia. La pueden deportar por la fuerza en cualquier momento, e incluso encerrarla en una prisión hasta por diez años, por desobedecer una orden federal; sin embargo, no está escondida ni vive en la clandestinidad. Su refugio es público en la avenida División, al norte de Chicago. Desde aquí responde llamadas a su celular, correos electrónicos, recibe a la prensa y a compañeros de lucha. Desde aquí organiza la campaña *América abre tus ojos* (alto a las redadas, deportaciones y despidos por el "no-match" y a las separaciones de familias), y se organiza también para la marcha del primero de mayo.

Su historia, producto del TLC. Madre de tres hijos a los que no ve desde hace ocho años, cuando tuvo que cruzar la frontera en busca de trabajo, Flor aclara: "Desde que llegué a Estados Unidos, en el año 2000, siempre he mantenido una posición correcta, nunca he robado, nunca he pedido ayuda al gobierno, he trabajado, pagado mis

impuestos, he respetado las leyes... nunca fue un sueño llegar a los EU".

"Era el inicio de julio de 2000 cuando tuve la necesidad de pedirle a mi madre el apoyo de cuidarme a mis hijos para poder desplazarme a los Estados Unidos y poder enviarles un poco de dinero. Mi madre tenía un pequeño negocio al borde de la carretera federal México-Acapulco, pero a partir de la creación de más de 4 mil kilómetros de carretera que implementó en 1997 el presidente Carlos Salinas de Gortari,

Y no es porque venimos a buscar el sueño americano. Existimos millones de indígenas y campesinos que nos han obligado a desplazarnos



FOTO: RAMILDO ESPINDOLA CABREIRA

cientos de negocios se vinieron abajo y ya no tuvimos la oportunidad de salir adelante. Por eso muchísimos de nosotros nos vimos obligados a venir a los Estados Unidos..."

Flor distingue entre la palabra migración, "que es el estado natural de todo ser humano, porque todos caminamos por el mundo", y desplazamiento forzado. "Desafortunadamente yo tuve que tomar la segunda opción. Es muy difícil todo, desde el momento en que atraviesas la frontera sin documentos, buscando el sustento para tu familia, te encuentras con esa xenofobia contra nosotros los mexicanos, los latinos, y sobre todo contra los indígenas. Nos vemos perseguidos, criminalizados, aunque la mayoría mostramos buena conducta, pero el gobierno no nos acep-

ta por el color de nuestra piel, por el tipo de cultura que tenemos... es muy difícil ser una persona perseguida, acosada, señalada con el dedo, cuando tú sólo vienes a buscar lo que se te arrebató descaradamente hace 14 años a través de la creación de las políticas comerciales como el TLCAN, que dañó tanto a México y que nos obligó a millones de personas a desplazarnos para buscar el sustento para nuestros hijos".

La redada contra los trabajadores de Ifco System le cambió la vida. La mayor parte de los 1 200 trabajadores detenidos fueron deportados, permaneciendo únicamente los 26 trabajadores de Chicago. "Desde entonces empecé a tomar conciencia y a emprender una lucha para apoyar al pueblo indocumentado. Desafortunadamente el día 4 de diciembre del 2006 un juez federal

de inmigración mandó una carta a mi abogado diciendo que yo tenía que salir voluntariamente del país el 28 de enero, y que si yo no me presentaba al servicio de inmigración con una maleta de 40 libras y mi boleto de avión, iba a quedar como una prófuga. Era muy difícil dejar esta lucha a medias. Ahora soy una prófuga, según las leyes rotas de los Estados Unidos, pero no me importa, mientras pueda seguir mandando el mensaje a través de la campaña *América abre tus ojos*".

La campaña está dirigida a educar (concientizar) al pueblo norteamericano. "Somos perseguidos y existe una gran xenofobia porque ellos están viendo que estamos creciendo numéricamente. Es importante que entiendan por qué existimos más de 12 millones de

indocumentados en este país. De estos millones, más de la mitad somos mexicanos. Y no es porque venimos a buscar el sueño americano. Existimos millones de indígenas y campesinos que nos han obligado a desplazarnos. El pueblo norteamericano tiene que conocer la situación que trajo el Tratado de Libre Comercio, que su gobierno creó y que dañó la economía de los campos en México, que dañó la subsistencia de los indígenas, individuos y pequeños negocios en México. Siendo nosotros los principales consumidores de maíz, no podemos siquiera producir nuestro propio maíz, nos vemos obligados a comprarlo a Estados Unidos y a Canadá, y eso no es justo, pues nosotros tenemos tierra. Hay algo turbio en el TLC que dañó tanto y seguirá dañando, y si el pueblo de Estados Unidos no actúa frente a estas políticas, van a seguir

entrando millones de latinoamericanos a este país".

Originaria de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Flor imagina su futuro en México "con mis hijos, trabajando igual, y concentrándome mucho más en nuestros pueblos indígenas. Presionando al gobierno de México para que tome una posición fuerte frente a la migración y para que tome responsabilidad de lo que él mismo crea... Que el gobierno cree trabajos, subsidios al campo, para no tener que salir de México".

También se interesa en la autonomía de los pueblos zapatistas de Chiapas, que se organizan sin el gobierno y crean sus propias escuelas y clínicas. "Son una inspiración y una esperanza", concluye.



FOTO: NILCIMAR CABREIRA MORALES

El empobrecimiento inexplicable de los más pobres de Guerrero

Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que trabaja en la Montaña de Guerrero, Abel Barrera constató, en entrevista con Ciepac, la "delicada" situación de los pueblos indígenas y su "empobrecimiento mayúsculo, aparejado con una espiral de violencia del Estado", mediante políticas que desprecian la vida comunitaria, sus derechos colectivos y sistemas normativos. "En los últimos 15 años se ha intensificado la militarización con el pretexto del combate al narcotráfico, y los saldos son negativos, la siembra de enervantes sigue a la alza y la resistencia de los pueblos indígenas se encuentra acorralada por la militarización y la criminalización de la protesta".

Con un nivel de empobrecimiento "escandaloso" en la región, "la crisis agrícola ha devastado los pueblos y los ha dejado en condiciones de miseria que los ha expulsado para enrolarse como jornaleros agrícolas, asumiendo el rol de peones acasillados en las agroindustrias de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Michoacán y Baja California Norte. Los niños tienen que dejar la escuela para desempeñarse como trabajadores eventuales y las mujeres embarazadas trabajan en los surcos de los vegetales chinos, o con el recién nacido en sus espaldas. Lo peor es que la gente está dejando de sembrar el maíz y cede a la tentación de aventurarse para sembrar amapola, lo que complica más los problemas sociales y de convivencia entre comuneros y ejidatarios de la región, por la narcoviolenencia. A mayor pobreza, mayores militarización y violencia".

El gobierno perredista de Zeferino Torreblanca "para los pueblos no ha representado ningún cambio, por el contrario mantiene el saqueo y desmantelamiento de la economía comunitaria para imponer megaproyectos que atraigan la inversión extranjera, esperando el milagro de que con las ganancias de las transnacionales habrá una derrama económica que favorezca a la clase trabajadora. Se han cerrado los canales del diálogo y se utiliza la fuerza del orden para arremeter contra estudiantes, campesinos e indígenas".

Los líderes sociales enfrentan órdenes de aprehensión y los defensores de derechos humanos no cuentan con garantías para realizar su trabajo. Manuel

Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en el municipio de Chilapa, fue detenido por la policía municipal y se encuentra procesado por el delito de ataques a las vías de comunicación, por acompañar y documentar una protesta de nahuas que exigían el cumplimiento de las obras prometidas por la presidenta municipal Alicia Zamora.

La siembra de enervantes sigue a la alza y la resistencia de los pueblos indígenas se encuentra acorralada por la militarización y la criminalización de la protesta

En Guerrero "no es extraño que emerjan organizaciones insurgentes, como ha sucedido desde la época revolucionaria", apunta el entrevistado. Los pueblos sufren la represión, "que ha costado centenares de desapariciones de luchadores sociales, ejecuciones extrajudiciales, la



FOTO: NILCIMAR CABREIRA MORALES

práctica de la tortura como método de trabajo de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), las detenciones arbitrarias, el maltrato y la discriminación contra los indígenas que se han visto obligados a resistir".

El gobierno federal, según Barrera, "maneja una información optimista sobre el combate al narcotráfico". En los estados más pobres, "siguen intactas las redes del narcotráfico y más bien ha fortalecido su poder, que crece a la sombra de los cuerpos de seguridad. Hay más violencia, inseguridad y pobreza", y los resultados de la estrategia militarista contra el crimen organizado "son magros".

Prevé que "la reaparición en los medios de comunicación" de grupos guerrilleros como el ERPI "aumentará la escalada militar, que ya se manifiesta con la instalación de retenes en los caminos y carreteras de la Montaña Baja y Alta. Aumentarán la tensión social y la militarización en las comunidades, el hostigamiento, una vigilancia permanente a las organizaciones sociales y civiles, "por catalogarlas desde la óptica conspirativa

como brazos civiles de los grupos armados". Se impulsa la militarización "descuidando las causas estructurales de la pobreza y las razones profundas".

El gobierno "tiene que entender que los pueblos indígenas y campesinos, centran su desarrollo comunitario en el trabajo agrícola y la producción de los alimentos básicos". Para Barrera, "la inversión debe concentrarse en garantizar la autosuficiencia alimentaria y hacer viable la vida en el campo. Esto lo demuestra el trabajo de los migrantes; gran parte de sus remesas son orientadas a reactivar la economía familiar y comunitaria, a garantizar la salud, la educación y la vivienda digna".

Se pronuncia por "un cambio de fondo en las políticas públicas". La inversión se concentra en los mega negocios, que implican la privatización de los recursos estratégicos. "El gobierno busca extraer la riqueza (agua, bosque, recursos bióticos) sin involucrar a la población local para que participe de estos beneficios".

En la Montaña "las comunidades se encuentran divididas por cuestiones políticas agrarias, religiosas y educativas; son escasos los procesos autogestivos, y para mal de ellos, están mediatizados por líderes vinculados a los partidos políticos". Esto impide que los pueblos "puedan emerger como actores políticos, con capacidad de construir su propio desarrollo". La militarización "aborda" sus iniciativas autogestionarias y el mismo gobierno persigue y coloca fuera de la legalidad "a los proyectos que impactan favorablemente los derechos de los pueblos, como la Policía Comunitaria" que desde hace 13 años funciona como sistema de justicia alternativa a cargo de autoridades indígenas nombradas en asamblea.

Al militarizar el país, y sobre todo las regiones con alta conflictividad social, el gobierno opta por violentar los derechos humanos sin atacar las causas del empobrecimiento de los pueblos ni la alta incidencia en la siembra de enervantes, "provocada por la miseria".

Entrevista: Luz Kerkeling. Una versión más amplia aparece en boletín 559 de Ciepac, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.



FOTO: NILCIMAR CABREIRA MORALES

Revuelta de los ganaderos bolivianos

Rosa Rojas, La Paz, Bolivia. Que una buena parte de la disputa por la nación en Bolivia se dirime en torno a la tierra y con ella la apropiación de los recursos naturales, renovables y no renovables, quedó claro a mediados de abril, ante la rebelión de los hacendados de la región de Camiri, que han tomado las armas para evitar el proceso de dotación de tierras a parte del pueblo guaraní asentado en el departamento de Santa Cruz. A estas acciones se sumaron ganaderos de la región de El Chaco de los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

La revuelta ganadera de la cruceña provincia Cordillera, fue rápidamente apoyada desde la capital de ese departamento por los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), conocida como “brazo armado” del Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por un conocido latifundista, Branko Marinkovic, quien es también uno de los principales fabricantes de aceite comestible en el país, afectado a su vez por la determinación del gobierno, de mediados de marzo, de prohibir la exportación del producto mientras no se garantice el abasto nacional a “precio justo”.

Así, los cruceñistas, los ganaderos y sus peones, bloquearon desde el 10

con los hacendados chaqueños, por falta de tierras para vivir y trabajar.

La rebelión de los ganaderos los llevó a emboscar a un grupo de guaraníes y funcionarios del INRA en la comunidad de Cuevo, cercana a Camiri, con el saldo, al momento de cerrar esta nota (14 de abril), de 40 heridos —cuatro de ellos de gravedad— y once desaparecidos (cuatro mujeres), entre guaraníes y funcionarios.

Un enfrentamiento entre indígenas que luchan por la tierra y hacendados que se niegan a ser afectados para entregárselas es algo frecuente en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, en este momento en aquella región cruceña, ubicada a 1 211 kilómetros al sureste de La Paz, significa mucho más: es la concreción, más allá de las palabras que hablan de descentralización del poder, de modernización del Estado boliviano y de defensa de la democracia, de que la lucha de las élites de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando por la autonomía departamental tiene como fondo la defensa de sus privilegios.

¿Qué significa eso? El 7 de septiembre de 2005, Econoticiasbolivia.com publicaba: “El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del

de derecha y casi siempre han controlado el congreso y el gobierno. Sin embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del petróleo y el gas”.

“No es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones sociales, laborales y populares del país que pugnan por la nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina reforma agraria” añadía la publicación.

Al acceder al poder un indígena, Evo Morales, impulsado por un frente, el Movimiento al Socialismo de organizaciones populares, indígenas y campesinas, las denominadas “logias” del oriente perdieron su preeminencia en el aparato estatal pero no su poder económico.

Ahora, explicó en entrevista con este diario el rector de la Universidad

opuesto el presidente Evo Morales a esa demanda autonómica por considerarla “oligárquica”, lo que ocurrió es que “los sectores dominantes de Santa Cruz, que controlan los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión a excepción del canal del Estado” han logrado que “la inmensa mayoría de los cruceños... identifique los problemas de Santa Cruz con problemas con Evo Morales” y al mandatario como “enemigo” del departamento.

Justiniano considera que el Estatuto Autonómico Departamental (EAD) que será sometido a un referéndum el próximo 4 de mayo, mismo que el gobierno y la Corte Nacional Electoral (CNE) han calificado como “ilegal y anticonstitucional”, es “separatista y antinacional”. Por ello, con el grupo SCST ha solicitado la suspensión de esa consulta, hasta que se apruebe primero una nueva Constitución Política, que le dé marco legal a la autonomía y se elabore un nuevo EAD pero con la participación de la ciudadanía en su conjunto y no, como ahora, por un reducido grupo de personas.

El gobierno de Morales por su parte busca frenar el referéndum cruceño, (que no ha logrado el apoyo de la comunidad internacional, ya que la ONU, la OEA y la Unión Europea, además de la Comunidad Andina de Naciones han manifestado que debe apegarse al marco legal nacional), pero también necesita avanzar en la aplicación de su “revolución agraria”.

Parte de la misma es la creación de una TCO en Alto Parapetí, de incierto futuro, para dotar de tierras a familias guaraníes que en pleno siglo XXI están sujetas a relaciones de servidumbre medievales, que algunos califican de “esclavitud” aunque el cardenal cruceño, Julio Terrazas, señalara en una homilía que “mienten” quienes hablan de “esclavitud” entre los guaraníes.



RESERVA DE DOURADOS, BRASIL. FOTO: NILCIMAR CABRERA MORALES

de abril la carretera a Argentina (en forma intermitente) y los caminos vecinales, impidiendo la entrada de la brigada del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), que buscaba realizar el saneamiento de la tierra en el Alto Parapetí, donde comunidades guaraníes solicitaron desde 1996 la creación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), ante la evidencia de que más de un millar de familias guaraníes permanecen “cautivas” en relaciones de servidumbre

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido hoy, establece que la distribución de la tierra es tan desigual en el país que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas —casi todas indígenas— apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas”.

“Estas familias también tienen enorme peso en los partidos políticos

Ecológica de Bolivia, Jerjes Justiniano, uno de los fundadores del desaparecido Partido Socialista e integrante del grupo ciudadano “Santa Cruz somos todos” (SCST), se ha logrado entretejer la defensa de los intereses de los grandes latifundistas del oriente boliviano, la región más rica del país, con la legítima demanda autonómica por la que votó en 2006 la mayoría de la población de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Al mismo tiempo, indicó, al haberse

página
final